

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Alcides Martínez Ochoa
DEMANDADO	AFP Porvenir S.A. Protección S.A. y Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 023 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 023 2020 00199 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 146 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Confirma

En la fecha, **cuatro (04) de agosto dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la **AFP Porvenir S.A.** y el grado especial de consulta para **Colpensiones**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Alcides Martínez Ochoa**. Radicado único nacional 05001 3105 **023 2020 00199** 01.

Auto: en los términos y para los efectos de la documental aportada vía correo electrónico se procede a reconocerle personería jurídica a la abogada Leslie Alejandra Bermúdez Herrera, para que continúe con la representación de Colpensiones.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **019**, que se plasma a continuación:

Antecedentes

Atendiendo lo que es objeto de análisis en esta instancia, se tiene que el actor busca obtener la declaración de ineficacia del traslado realizado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad a través de las AFP Protección S.A. y Porvenir S.A.. Además, pretende se declare válida, vigente y sin solución de continuidad su incorporación al primero. En consecuencia, solicita condenar a Porvenir S.A. a restituir a Colpensiones todos sus aportes, incluyendo los rendimientos financieros y las cuotas de administración. Asimismo, pide que Colpensiones reciba dichos conceptos y reactive la afiliación. Por último, reclama la condena en costas para las entidades demandadas.

En sustento de ello afirma que, nació el 27 de junio de 1959, realizando aportes al extinto ISS entre el 01 de febrero de 1980 y el 31 de diciembre de 1997, para un total de **817 semanas**. Asevera que el 06 de mayo de 1997 se trasladó a Protección S.A., y el 21 de julio de 2000 a Colpatria (hoy Porvenir S.A.), cotizando 1.155 semanas, acumulando así un total de 1.972 en toda su vida laboral. Esgrime que al momento de afiliarse al RAIS no recibió una asesoría clara y concreta acerca de la edad mínima requerida, ni del saldo necesario en su cuenta de ahorro individual. Es decir, no le informaron con qué ingreso base de cotización (IBC) debía contribuir para acceder a una pensión anticipada o completar el capital necesario para la prestación ordinaria de vejez. Además, no le comunicaron a qué edad se redimiría el bono pensional, ni la diferencia en la cuantía de la mesada que recibiría en el RAIS en comparación con el Régimen de Prima Media. Asimismo, no se le explicó que podría regresar al RPMPD antes de cumplir

los 52 años, sin recibir asesoramiento previo a dicha edad. Sostiene que a través de un comunicado fechado el 04 de mayo de 2020, Porvenir S.A. le informó que a los 62 años recibiría una mesada pensional de \$2.468.000,00 si dejaba de cotizar, y de \$2.591.600,00 si continuaba realizando aportes. Sin embargo, al calcularla en el RPMPD, con el promedio de los últimos 10 años, el monto ascendería a \$6.184.679,00. Que solicitó a Colpensiones la declaración de ineficacia del traslado, lo que fue rechazado.

En auto del **27 de agosto de 2020**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enteradas de la actuación, las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación así:

Colpensiones, de los hechos tiene como ciertos, la fecha de nacimiento del actor, la solicitud de traslado y la respuesta dada a la misma. Los demás supuestos no le constan al tratarse de situaciones particulares del demandante. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones y formuló **las excepciones** de falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación de aceptar la vinculación al régimen de prima media con prestación definida, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de vejez, retroactivo y/o intereses de mora, prescripción, compensación, buena fe, e imposibilidad de condena en costas.

Protección S.A., reconoce la fecha de nacimiento del señor Alcides, su afiliación al régimen de prima media con prestación definida y el número de semanas que ha aportado a dicho fondo. Asimismo, admite el traslado realizado a la entidad y la migración posterior a Porvenir S.A., así como la proyección de la pensión realizada para él. Los restantes supuestos de hecho no le constan. No obstante, en su defensa, señaló que, al momento de suscribir el formulario, se explicó al actor que la pensión de vejez en el RAIS se construye mediante una cuenta de ahorro individual donde se depositan sus aportes mensuales, generando rentabilidad financiera de

acuerdo con el mercado. También se le informó que para determinar el valor de la pensión se deben considerar variables como la edad, los aportes obligatorios y voluntarios, los beneficiarios, la existencia o no de un bono pensional, las tablas de mortalidad de rentistas, el factor actuarial y las regulaciones de la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por esta razón, no era posible conocer de antemano el saldo exacto que debía acumularse en la cuenta de ahorro individual, ni el monto de la prestación. Las proyecciones realizadas en ambos regímenes al momento de la suscripción del formulario eran estimaciones verbales basadas en las condiciones vigentes, con el propósito de brindar una mejor comprensión de la situación pensional de cada persona. Reitera que se expusieron las condiciones legales para liquidar la prestación en ambos regímenes, enfatizando que en el RAIS el derecho a la pensión y el monto de la mesada se determinan en función del capital acumulado en la cuenta, independientemente de la edad o los años de cotización, de acuerdo con los factores variables, a diferencia del RPM. **Resistió las pretensiones** y propuso como excepciones de mérito las que denominó: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, traslado de aportes, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y prima del seguro previsional por falta de causa y por afectar derechos de terceros de buena fe y la innominada o genérica.

La **AFP Porvenir S.A.**, frente a los supuestos facticos indica que no son hechos, no son ciertos o no le constan. Empero, sostiene que se proporcionó al actor información clara, precisa y veraz de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 100 de 1993, la cual describe el funcionamiento, características y requisitos del régimen. También se mencionaron los alcances del traslado y los requisitos para acceder a la pensión bajo este régimen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64

de la misma ley, por lo que la decisión de suscribir el formulario de afiliación fue tomada de manera libre, voluntaria e informada, en conformidad con el literal e) del artículo 13 de la Ley de 1993. Destaca que el documento de admisión se presume auténtico según lo establecido en el artículo 114 de la Ley 100 de 1993, los artículos 243 y 244 del Código General del Proceso, y el párrafo 54 del Código Procesal del Trabajo. Enfatiza que, al tratarse de un sistema público y obligatorio, las condiciones de afiliación, traslado, cotización y otorgamiento de prestaciones tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el régimen de ahorro individual con solidaridad están completamente determinadas y establecidas por ley, sin que las partes puedan modificarlas. **Enfrentó las pretensiones y exhibió excepciones de mérito tendientes a enervarlas**, las que denominó: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y la genérica.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito, declarando la ineficacia de la afiliación realizada por el señor **Alcides Martínez** al RAIS, administrado por **Protección S.A** y posterior movilidad a **a Porvenir S.A.**, condenando a esta última a que dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia traslade a Colpensiones el valor de la cuenta de ahorro individual del actor *"con sus respectivos rendimientos, incluidas las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados (estos tres últimos conceptos)"*. Así mismo y dentro del mismo término, Protección S.A. debe retornar a Colpensiones *"las cuotas de administración, primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexados"*. Anotó que al momento de cumplirse la orden ambas AFP *"deberán remitir a COLPENSIONES la relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen."* Le ordenó a Colpensiones recibir las sumas que le sean giradas y las convierta en

semanas cotizadas, teniendo al actor afiliado sin solución de continuidad a dicho fondo. Declaró no probadas las excepciones propuestas, gravó con costas a Porvenir S.A. y Protección S.A, fijando el monto de las agencias en derecho.

Argumentó el fallador que, bajo las premisas normativas y alcance de la línea jurisprudencial, coherente y sólida de la Sala de Casación Laboral, frente al tema de la ineficacia, para el caso las AFPs no acreditaron el cumplimiento del deber de información calificada, completa, suficiente, idónea y comprensible, de acuerdo a la etapa en que se estaba, sin que dicho deber se entienda satisfecho con la suscripción libre y voluntaria de los formularios de vinculación que se aportan; en consecuencia, le impuso al acto de traslado del RPMPD al RAIS la sanción de ineficacia, con las restituciones indicadas.

El **recurso de apelación** fue interpuesto por la apoderada de la **AFP Porvenir S.A.**, solicitando la revocatoria del fallo, particularmente en lo referente a los emolumentos a devolver y su indexación, como el fondo de garantía de pensión mínima, los gastos de administración y los seguros previsionales. Para respaldar su solicitud, argumenta que estos dineros se descuentan con autorización legal y que ordenar su restitución implicaría:

- 1.** Desconocer la labor de la entidad en la administración de los recursos.
- 2.** Generar un enriquecimiento injustificado, ya que estos rubros no están destinados a financiar la prestación del afiliado.
- 3.** Vulnerar el derecho a la igualdad al privilegiar injustamente a una de las partes del contrato.

En relación a la indexación, arguye que su objetivo es actualizar la moneda para contrarrestar la devaluación y la inflación, por tal, en este caso no sería compatible, ya que los recursos de la cuenta de ahorro individual no han sido afectados y, por el contrario, han generado rendimientos que superan los mínimos establecidos por ley. Además, los tribunales

superiores de Cundinamarca y Medellín han considerado excesiva la imposición de la actualización, ya que los rendimientos remedian cualquier depreciación.

En favor de Colpensiones se conoce en el grado jurisdiccional de consulta.

De la oportunidad para presentar alegaciones hizo uso el apoderado de la **AFP Porvenir S.A.**, quien después de realizar un recuento de la actuación, insiste en que no se dan los supuestos para declarar la ineficacia del traslado, pues no se alegó, ni probó ninguno de los eventos previstos en el artículo 1741 del Código Civil, ni de los vicios relacionados en el 1508 de la misma obra, y la sanción del precepto 271 de la Ley 100 de 1993 está a cargo de la autoridad administrativa, realizándose por la Sala de Casación Laboral una mixtura para decidir el tema, quedando además evidenciada la selección libre, voluntaria y sin presiones por parte del actor, sumado a que el documento contentivo de la misma no fue tachado de falso, sin que tampoco se superen los requisitos para la declaratoria de nulidad relativa o absoluta.

Advierte que también se garantizaron los derechos de retracto y libre escogencia, cumpliéndose con el deber de información exigido para la época, sin que se contemplara respaldo documental de la misma, salvo el correspondiente formulario, pidiendo un análisis crítico y conjunto de las pruebas y efectuar la diferenciación entre la ineficacia y nulidad de los actos jurídicos y sus efectos, conceptos que explica en forma detallada. Seguidamente trae a cita el concepto de buena o mala fe en las restituciones mutuas, y pide exoneración de la indexación ordenada, citando como respaldo providencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, con fecha 21 de junio de 2022, ratificando la súplica de absolución para esa sociedad.

Colpensiones, hace referencia al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional establecido en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, que busca garantizar la sostenibilidad y continuidad del sistema de pensiones en el país, por tal, una declaración injustificada de la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad afectaría dicho principio. Sostiene que la información proporcionada por el fondo al momento del traslado debe valorarse según la normatividad vigente en ese momento y que no se deben imponer obligaciones o requerimientos que no estuvieran previstos en la legislación vigente en esa fecha.

En caso de que se concedan las pretensiones, se solicita que no se emita condena en su contra, al ser ajena al contrato celebrado entre el demandante y las Administradoras de Fondos de Pensiones Privadas, y que se disponga la entrega de los valores cotizados y depositados en la cuenta de ahorro individual del demandante, incluyendo cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos, intereses y otros conceptos relacionados.

También se pide que las AFPS privadas reporten los archivos adecuados ante ASOFONDOS para se cargue la historia laboral de quienes se traslada bajo esta modalidad, ya que esto permitiría la verificación la información correctamente y cumplir adecuadamente con lo ordenado judicialmente.

Demandante, solicita confirmar la sentencia que declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional realizado debido a la falta de asesoría e información adecuada por parte del fondo privado. Aduce que el traslado no fue libremente consentido y, por tanto, debe anularse para retornar al régimen de prima media.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Como hechos debidamente acreditados se tienen: la vinculación del demandante al RPM, el 01 de febrero de 1980; su tránsito al RAIS a través de **Protección S.A.** con formulario suscrito el 06 de mayo de 1997, y posterior cambio a la **AFP Colpatría hoy Porvenir S.A.** el 21 de julio de 2000.

De acuerdo con el recuento realizado, los argumentos de la apelación y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS a través de **Protección S.A. con movilidad a Colpatría hoy Porvenir S.A.**, y como consecuencia de ello, a su inmersión automática en el RPM, con las correspondientes restituciones económicas, los conceptos que estas comprenden y si se debe ordenar o no su actualización mediante el mecanismo de la indexación.

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas, que la movilidad debe estar precedida de la debida información y transparencia, **para el caso concreto, como los formularios se suscribieron en los años 1997 y 2000**, se estaba en la primera etapa de la regulación normativa, contenida entre otras en los arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1º del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no

menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, y por tanto, el contenido mínimo estaba circunscrito a la **ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales**, y suponía el análisis de la situación particular de cada afiliado ante el sistema; sin que obre prueba de la debida ilustración por parte de las **AFP** sobre el funcionamiento, diferencias entre ambos regímenes, ventajas, desventajas, forma de liquidar y modalidades de pensión en el RAIS, bajo las reglas de la normatividad vigente para tal calenda, ni del debido acompañamiento durante el tiempo en que ha estado allí, sin que tal omisión se subsane por el transcurso del tiempo o por el tránsito entre administradoras, toda vez que,

... la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales, (ver sentencia CSJ Sala de Casación Laboral 31989 de 2008, reiterada en la SL5686-2021 y SL2693-2022, entre otras).

Lo que se reitera en sentencia SL4322-2022, así:

No tiene incidencia, en principio, el hecho de que el recurrente haya seleccionado una segunda administradora del Régimen de Ahorro Individual en el año 2012, primero, porque con ello no se está convalidando la ineficacia cuando se hizo el traslado de régimen (CSJ SL, 09 sep. 2008, rad. 31989; CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, entre otras) y, en segunda medida, porque si se decreta el acaecimiento de tal figura, esa declaratoria afecta a todas las administradoras que se hayan sucedido desde la inicial a la cual se hizo el traslado, por cuanto la aspiración en el fondo entraña que se entienda que el afiliado permaneció en el Régimen de Prima Media, es decir, que para todos los efectos nunca lo abandonó.

Y no basta afirmar que al ser el sistema de pensiones de carácter público toda su regulación es legal y por ser así se presume su conocimiento por los afiliados, pues de un lado, se está ante un tema técnico que requiere manejo especializado, y por otro, es clara la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, entre otras en sentencia SL2484-2022 cuando indica:

*... le corresponde a la administradora de pensiones acreditar el cumplimiento del deber de información, **pues exigir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que no haber recibido información suficiente corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación** [1] (CSJ SL1452-2019, reiterada en CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL4426-2019 y CSJ SL4806-2020).*

Asimismo, porque la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad quien debe observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.

***Y es que no es razonable invertir la carga de la prueba contra la otra parte de la relación contractual, toda vez que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto del afiliado lego, a tal punto que la legislación considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros** (artículo 11, literal b) de la Ley 1328 de 2009). Negrillas fuera del texto original.*

Y en la SL1197-2021, señala:

*Así lo es, pues **en su disertación llega al punto de postular que era la accionante la que debía tener conocimiento de aquellos presupuestos**, contrario a ello, debió el Colegiado considerar que el deber de información debió ser veraz, oportuno e insoslayable en este campo de la seguridad social. **Las AFP tienen la imperativa obligación de brindar una asesoría suficiente, y por ello, si el afiliado alega que no fue así, como aquí ocurrió, el Tribunal debía entonces contraer su atención en elucidar si ese deber se satisfizo o no, con pruebas que lo demuestren de forma contundente, más aún, si aquella está, tal y como se indicó en el precedente transcrito, en mejor posición que los afiliados, para demostrar esas circunstancias.** Negrillas extra texto.*

Ni de los formularios se infiere la completa ilustración, así se asevera en sentencia SL4322-2022:

Se sigue de lo anterior que el simple diligenciamiento del formulario no suple en manera alguna el deber de información, como erradamente parece haberlo entendido el Tribunal y, mucho menos, con el nivel de calidad que la jurisprudencia ha venido exigiendo, ni resulta ser demostrativo de haberse satisfecho en debida forma el mentado deber

(CSJ SL1741-2021 en la que se memoraron las sentencias CSJ SL1421-2019; CSJ SL4964-2018 y CSJ SL19447-2017), ni la suscripción de ese preimpreso remueve la obligación que le asistía a las AFP de cumplir con el requisito de brindar la debida información y de probarlo en el proceso, así como tampoco lo hace la aceptación en el interrogatorio de parte del demandante de haber recibido una información, pero no con las características y profundidad debidas.

Y en la misma providencia se explica que no es posible afirmar:

... que para la época en que el demandante se trasladó, la selección del régimen pensional no tenía relación con el monto de la pensión, pues lo que se espera al momento del traslado no es precisamente que se le informe el valor futuro de la prestación, sino que se le explique que aquella depende del capital acumulado en la cuenta individual, por lo que, las AFP como expertas en el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, cuentan con los soportes técnicos, estadísticos y actuariales para realizar proyecciones del capital que en el tiempo puede acumular el afiliado para acceder a su derecho pensional, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno al momento del traslado, como la edad, sexo, nivel de ingreso, persistencia en la cotización, etc; información con que cuenta la AFP por encontrarse registrada en el formulario de afiliación y en la historia laboral del afiliado.

Así mismo, advierte el juzgador de alzada que la solicitud del demandante de retornar a Colpensiones no se realizó dentro de los plazos previstos, según las sentencias de la Corte Constitucional que citó en la providencia; sin embargo, resultaría ser un desaguizado centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Horizonte hoy Porvenir SA, con lo cual, se desdibujaría por parte del Colegiado de instancia el pedimento efectuado desde el escrito inaugural (CSJ SL1475-2021). Negrillas intencionales.

Ni se pueden invocar actos de relacionamiento como sustento de saneamiento, en el mismo pronunciamiento se dice sobre el particular:

De la misma manera, encuentra la Sala que tampoco le asistió la razón al Tribunal al sostener que actos posteriores al traslado de régimen pensional efectuado en el año 2000, de aparente asentimiento con el RAIS, o las calidades personales o profesionales del demandante acumulados a lo largo de su vida, per se, convalidaron de alguna manera el hecho de que al momento de la afiliación la AFP no cumplió con el deber que le competía, como se ha explicado a lo largo de esta providencia (CSJ SL 3349-2021).

Y en sentencia SL1055-2022, se expuso:

Pues bien, como se explicó en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta índole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones está en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona contó con información suficiente para tomar esa decisión. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se trasladó entre fondos privados o no retornó a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jurídico del traslado de régimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jurídico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.

De modo que no es dable siquiera sugerir que los posteriores traslados entre administradoras pueden configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad de permanencia en ellas, como se infiere de las decisiones de la Sala de Descongestión de esta Corte CSJ SL249-2022 y SL259-2022. Nótese que, conforme la perspectiva explicada, esa voluntad de permanencia en el RAIS es inane dado que no desvirtúa el incumplimiento del deber de información y además ubica la discusión en actuaciones que estarían respaldadas en un acto jurídico ineficaz, esto es, el del traslado inicial.

Justamente lo anterior explica que la acción para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como también lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin más agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de régimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.

Por tanto, nuevamente se enfatiza que este es el precedente vigente y en vigor de la Sala de Casación Laboral de esta Corte, y recoge cualquier otro que le sea contrario, en especial el condensado en aquellas providencias.

Reiterándose en sentencia CSJ SL1442-2021 que memoró el fallo CSJ SL12136-2014, que la información precisa, es un elemento esencial para pregonar que hubo *libertad* en la toma de la decisión, lo cual supone, necesariamente, el conocimiento de las consecuencias positivas y negativas de su acogimiento, acarreado su inobservancia **la ineficacia del acto de traslado de régimen en los términos de los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que:**

... las cosas vuelven a su estado anterior, de manera que la administradora tiene que asumir los deterioros del bien administrado,

pues la ineficacia se declara como consecuencia de la conducta del fondo, al haber incurrido en la omisión de brindar la información adecuada, oportuna y suficiente al afiliado, quien tenía derecho a recibirla, no de forma gratuita, sino con cargo a la comisión de administración de aportes obligatorios y comisiones por buen desempeño que se descuentan de la cotización y de su ahorro, deducción autorizada por el artículo 104 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 53 de la Ley 1328 de 2009 y que permite el literal q) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer: Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente Ley.

Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020. Reiterada en la SL843-2022). Negrillas intencionales.

Por ser el precedente vigente, es el acogido por esta Sala de Decisión, **por lo que se confirma la declaratoria de ineficacia de la vinculación del demandante al RAIS y su cambio de administradora.**

En lo atinente a los rubros a devolver, su actualización mediante el mecanismo de la indexación, y **la obligación de las AFP de asumir lo descontados por gastos de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima con su propio patrimonio**, surgen, entre otras, a partir de las sentencias **SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021** reiteradas, entre otras en las **SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022, SL1055-2022, SL2484-2022, SL4322-2022 y SL554-2023**, sin que sea una decisión caprichosa, **pues como ya se advirtió se acata el precedente vertical reiterado en más de 3 providencias que constituyen doctrina probable.**

Desde este punto de vista, no se estaría generando enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES o del demandante, y tampoco doble condena, ya que se trata de la reivindicación de unas sumas que integran la cotización y que deben dirigirse a la administradora a la que ha pertenecido siempre sin solución de continuidad, máxime que fue la conducta de las AFP la que generó la ineficacia aquí declarada.

Por lo que se **confirma** la sentencia revisada en cuanto ordenó a la **AFP Porvenir S.A.**, reintegrar a Colpensiones, además del saldo de la cuenta de ahorro individual del demandante con los rendimientos financieros, los valores descontados por **gastos de administración, seguros previsionales y porcentaje aplicado a garantía de pensión mínima, estos tres debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, últimos conceptos – actualizados a la fecha del reembolso-, que también se hacen extensivos a la AFP Protección S.A.**, cada administradora por el tiempo de vigencia de la afiliación del señor Martínez Ochoa. Así mismo se avala lo resuelto en cuanto a que al momento de cumplirse la orden impartida en cuanto a restituciones, deberá remitirse a Colpensiones relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Las costas en esta instancia quedan a cargo de la AFP Porvenir S.A. a quien se desata adversamente el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000,00 a favor del demandante.

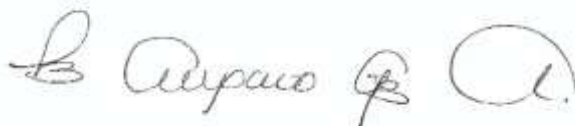
En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito dentro del

proceso ordinario promovido por **Alcides Martínez Ochoa**, contra la **AFP Porvenir S.A., Protección S.A. y Colpensiones**.

Costas en esta instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A., a quien se desata adversamente el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00 a favor del demandante**.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO